



Bogotá, 26 de agosto de 2020

Presidente

**OSWALDO ARCOS BENAVIDES**

Comisión Sexta Cámara de Representantes.

Congreso de la República.

Ciudad

**Referencia:** Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 109 de 2020 Cámara, “Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”.

Respetado Presidente.

En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, por medio del presente escrito nos permitimos rendir informe de ponencia positiva para primer debate al proyecto de ley de la referencia.

## **TRÁMITE DE LA INICIATIVA**

El pasado 20 de julio de 2020 fue radicado en la Secretaría General de la Cámara, el Proyecto de Ley 109 de 2020. La iniciativa tiene como autores a los siguientes: H.R. Rodrigo Arturo Rojas Lara , H.R. Carlos Julio Bonilla.

Por designación de la Mesa Directiva de la Honorable Comisión Sexta Constitucional de la Cámara se nombraron los ponentes para el estudio de esa iniciativa legislativa.

### **1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY**

Este proyecto de ley tiene por objeto dotar de herramientas legales al gobierno nacional para que se garantice la prestación del servicio de internet de manera eficiente, continua y permanente, con el fin de ampliar la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de los más vulnerables.

### **2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY**

a. Antecedentes.

### 2.1.1. Decretos Legislativos 464 y 555 de 2020

En atención a los múltiples efectos negativos que estaba ocasionando el Covid-19 en todo el territorio nacional, el pasado 17 de marzo del año en curso el presidente la república expidió el Decreto 417 de 2020, en virtud del cual se declaró el estado de emergencia económica social y ecológica, con fundamento el artículo 215 constitucional, con el propósito de adoptar, a través de Decretos Legislativos, las medidas y acciones necesarias para conjurar la crisis e impedir y mitigar la extensión de los efectos de la pandemia.

En ese contexto y conforme a las facultades asumidas por el jefe de estado, fueron expedidos los Decretos Legislativos 464 del 23 de marzo del 2020 y 555 del 15 de abril del mismo año. Ambos en su artículo primero establecen:

*“ARTÍCULO 1. Declaratoria de servicios públicos esenciales. Los servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por tanto, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio”.*

La diferencia entre dichos decretos radica en su vigencia y temporalidad, pues el primero establece que regirá por el término que se mantenga el estado de emergencia, mientras que el segundo contempla que permanecerá vigente mientras se mantenga la emergencia sanitaria, esta última decretada por el Ministerio de Salud en ejercicio de las facultades ordinarias (Resolución 844 de 2020<sup>1</sup>).

Es así como en la parte considerativa de ambos Decretos Legislativos, se argumenta que:

*“Que de conformidad con el numeral 10 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones", con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación*

---

<sup>1</sup> Artículo 1. Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

*de los trámites y servicios digitales, es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones.*

*Que los servicios de telecomunicaciones y postales permiten la protección de bienes jurídicos ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivas las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad. Si bien los artículos 10 y 73 de la Ley 1341 de 2009, 1 de la Ley 182 de 1995 y 1 de la Ley 1369 de 2009, definen que estos servicios son públicos, no han determinado que revisten naturaleza de esenciales, adicionalmente, fueron expresamente excluidos del régimen de los servicios públicos domiciliarios por el citado artículo 73. Esta declaratoria es especialmente importante para garantizar la operación, adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones y postales, de manera ininterrumpida, durante la emergencia, porque estos servicios habilitan la comunicación remota, que es fundamental para permitir el desarrollo de actividades en condiciones no presenciales que permitan el distanciamiento social y aislamiento, acciones claves para la contención y mitigación del COVID-19.*

*Que la Corte Constitucional, en sentencia C-691 del 9 de julio de 2008, estableció el criterio para determinar si un servicio público es esencial, señalando "(...) cuando "las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales"*

*Que en esa medida los servicios de telecomunicaciones y postales se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de bienes jurídicos ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivas las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad, por tanto, los servicios de telecomunicaciones y postales, revisten naturaleza de esenciales y debe garantizarse la adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones y postales, de manera ininterrumpida, por lo que se hace necesario crear una norma en este sentido.*

*Que es necesario garantizar la continua y oportuna comunicación entre las autoridades, personal de atención médica, la población afectada, en riesgo, y el resto de los ciudadanos, para que conozcan, entre otras, las medidas a implementar, los canales de atención, los beneficios que sean entregados, entre otra información útil, que debe estar disponible y ser transmitida mediante los*

*servicios de telecomunicaciones incluyendo la televisión, así como los servicios postales, según la necesidad de difusión de la información por parte de las autoridades.*

*Que de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE, a diciembre de 2018 el 53,0% (8,2 millones) de hogares colombianos contaban con Internet (fijo y móvil), adicionalmente, el país cuenta con 22, 19 millones de conexiones de más de 10 Mbps, de las cuales 2,82 millones son residenciales fijas y 19,37 millones son móviles en tecnología 4G. En relación con los accesos residenciales de Internet fijo el 81,5 % (5.200.806) disponen de velocidad de bajada mayor o igual a 5Mbps. El 60,2 % (3.844.776) tienen acceso a Internet fijo con velocidad de descarga mayor o igual a 10 Mbps. Las anteriores cifras demuestran que, si bien el país ha avanzado de manera importante en la provisión de los servicios de telecomunicaciones aún no existe servicio universal, por ello, se precisan medidas para que las personas en necesidad de comunicarse y acceder a la información no vean restringidas sus posibilidades debido a problemas económicos derivados de la emergencia.*

*Que según las cifras del Boletín TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con corte al tercer trimestre de 2019, en el país había 12.412.834 abonados al servicio de Internet móvil por suscripción y 13.854.011 abonados al servicio de voz móvil por suscripción, esto es, usuarios en la modalidad de pospago que, podrían ver afectada su capacidad de pago por las restricciones en la disponibilidad de flujo de caja y el comportamiento en la tasa de cambio, como se expresa en la parte motiva del Decreto 417 de 2020. En consecuencia, para garantizar que la población acceda de manera permanente a los servicios de telecomunicaciones y postales, para asegurar su oportuna atención así como el ejercicio de sus derechos durante la emergencia, se deben adoptar medidas para que el servicio no sea suspendido por razones patrimoniales como la falta de pago o la mora en el pago del servicio, así como brindar la posibilidad de acceso a contenidos educativos que son fundamentales para garantizar este derecho, durante la emergencia sanitaria.*

*Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, especialmente el distanciamiento social, debido a la ocurrencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, es necesario adoptar acciones que permitan enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de las obligaciones que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de comunicaciones y, especialmente, que permitan de manera prioritaria el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones y postales para el acceso a los servicios de salud el desarrollo de actividades laborales y el ejercicio de*

derechos fundamentales, que prevalecen frente a servicios simplemente recreativos o de ocio.

(...)

*Que las redes y servicios de telecomunicaciones, al igual de los servicios postales, se convierten en instrumentos esenciales durante la emergencia sanitaria y es imperiosa la necesidad de garantizar su provisión a todos los habitantes del territorio nacional hasta que cesen las causas que dieron origen a la emergencia sanitaria y se retomen las actividades laborales y académicas de manera presencial y se disminuyan las mayores necesidades de uso de toda la población por lo que se requiere adicionar un parágrafo al artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 (...)"*.

#### 2.1.2. Constitucionalidad Decretos Legislativos 464 y 555 de 2020

Recientemente la Corte Constitucional mediante las Sentencias C-151 de 2020<sup>2</sup> y C-209 de 2020<sup>3</sup> declaró exequibles los Decretos aludidos, señalando:

*"(...) la Corte aplicó los juicios de finalidad, de conexidad material, de motivación suficiente, de ausencia de arbitrariedad, de intangibilidad, de no contradicción específica, de incompatibilidad, de necesidad, de proporcionalidad y de no discriminación, y pudo constatar que todas las medidas adoptadas en este decreto superaban los antedichos juicios. Por lo tanto, concluyó que el Decreto Legislativo 464 de 2020 supera el examen material de constitucionalidad.  
(...)"*

*Dentro de los anteriores análisis, la Corte revisó de manera específica cada una de las medidas adoptadas por el referido decreto. En este ejercicio, estableció que la declaratoria como servicio público esencial del servicio de telecomunicaciones, dentro del cual se incluyen los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales (art. 1), era compatible con la Constitución. **A esta conclusión se llegó al considerar que la propia Carta (art. 67 CP) faculta al legislador para definir los servicios públicos esenciales;** que el legislador ordinario, en diversas oportunidades, ha calificado a las telecomunicaciones como un servicio público esencial; y que, en la coyuntura generada por el COVID-19 y, en particular, en el contexto de las medidas sanitarias de distanciamiento social y de mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios, se encuentra que dichos servicios tienen, la condición de herramientas esenciales, durante el período de vigencia del Decreto Legislativo 464 de 2020, que es, según lo previsto en su*

<sup>2</sup> Comunicado No. 22. Corte Constitucional de Colombia. Mayo 27 y 28 de 2020.

<sup>3</sup> Comunicado no. 27. Corte Constitucional de Colombia. Julio 1 y 2 de 2020.

*artículo 7, “desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y regirá por el término que se mantenga el Estado de emergencia”.*

### 2.1.3. Petición al Gobierno Nacional

En virtud de lo anterior, el 5 de mayo que pasó, junto con mi colega el Representante Carlos Julio Bonilla, enviamos una misiva al señor presidente Iván Duque, proponiendo que con fundamento en el artículo 365 de la Constitución Política, en el cual se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es un deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, se establezca que el servicio de Internet, sea un servicio público esencial, más allá de la vigencia del Decreto 555 de 2020, al considerar en otras cosas, que la “nueva normalidad” a la que nos llevó esta pandemia, demanda que el Estado disponga de todos los instrumentos para garantizar el servicio de internet a todos los colombianos, pues está íntimamente ligado al ejercicio de múltiples derechos fundamentales, tales como como el acceso a la educación, a la vida, la educación, al trabajo, la salud, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital, a la seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, los cuales deben ser provistos por el Estado.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respondió aduciendo que las leyes 1341 del 2009 y 1978 del 2019, establecen que el estado ya tiene el deber de garantizar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones, para lo cual velará por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones, lo cual resulta un poco contradictorio con las medidas adoptadas vía Decreto Legislativo, pues de no tener ningún efecto o no ser necesario establecer este estatus, pues sencillamente podría afirmarse que tanto el artículo primero, como la excelente exposición de las consideraciones de los Decretos 464 como el 555 son también innecesarias, conclusión con la cual se no se está de acuerdo, pues contrario a lo dice el ministerio, esta medida resulta de vital importancia de cara al presente y por supuesto al futuro que nos espera en lo que refiere a la conectividad que se requiere para que poder desarrollar varios derechos fundamentales, tal y como se demostrará seguidamente.

## 2.2. Legislación comparada

Son varios los países que le han dado relevancia jurídica y normativa a la conectividad (internet). Algunos lo han elevado a rango constitucional, otros lo han contemplado en disposiciones legales y otros han avanzado vía jurisprudencial.

Antes de mencionar los casos concretos, valga la pena poner de presente que desde el año 2011, mediante la declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet<sup>4</sup>,

---

<sup>4</sup> Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet. (2011). Tomado de:



las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), frente al acceso a internet señalaron que:

“6. Acceso a Internet

a. **Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.**

(...)

e. **Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían:**

- i. *Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.*
  - ii. *Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.*
  - iii. *Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.*
  - iv. *Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.*
- f. *A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo”. (Negrilla propio).*

Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos en la resolución del A/HRC/20/L.13 del 29 de junio del 2012 denominada promoción, protección y difusión de los derechos humanos en internet indicó en lo que interesa:

“(…) 2. Reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas;

**3. Exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países(…)”.<sup>5</sup>(Negrilla propio)**

En esa misma línea la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución No. A/RES/70/299 aprobó la “Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Consagró como uno de los objetivos principales, el aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 (Metas del Objetivo 9)<sup>6</sup>.

#### 2.1.1. México

Desde el año 2013, con ocasión de la reforma a la industria de las telecomunicaciones, en México se consagró en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) el derecho de acceso a Internet.

Tal derecho se incorporó en el artículo 6º, relativo a la libertad de expresión. Al efecto, la reforma supuso incorporar nuevos incisos que reconocen el derecho de toda persona “al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. Acto seguido, la norma dispone una garantía constitucional al respecto<sup>7</sup>:

*“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. **El derecho a la información será garantizado por el Estado** (...).*

<sup>5</sup> Asamblea General de las Naciones Unidas. Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet 29 de junio de 2012. Tomado de: [http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d\\_res\\_dec/A\\_HRC\\_20\\_L13.pdf](http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf)

<sup>6</sup> La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Tomado de: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf)

<sup>7</sup> Congreso Nacional de Chile. 2020. INFORME DE LA COMISION DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Boletín 11.632-15.



***El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios (...).” (Negrilla propia).***

**Se argumentó por parte del gobierno mexicano que la importancia de internet es que es un habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la información, derecho a la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones<sup>8</sup>.**

### 2.2.2. Finlandia

En el año 2010, Finlandia fue el primer país del mundo en considerar a Internet como un derecho universal de sus ciudadanos, tal como el teléfono fijo y el servicio postal.

Este derecho, incluido en la Ley del Mercado de las Comunicaciones (*Communications Market Act*), en la sección 60, ha sido definido como una conexión funcional a Internet, la que se estimó por parte de la autoridad como de 1Mb por segundo, por medio del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esta velocidad se ha ido ampliando y actualmente alcanza los 2 Mb/s.

La Agencia de Transportes y Telecomunicaciones (TRAFICOM, ex Autoridad Finlandesa Reguladora de las Comunicaciones, FICORA), es la encargada de definir qué empresas son las que pueden prestar este servicio universal y cuál es el rango de precios razonable para que la banda ancha pueda ser accesible a toda la población.

### 2.2.3. Francia

Francia reconoció el acceso a Internet como un derecho básico mediante sentencia del Consejo Constitucional Francés, No. 2009-580 DC de 10 de junio de 2009, al desprenderlo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que tutela la libre comunicación de pensamientos y opiniones.

### 2.2.4. Costa Rica

Este país, por su parte tomando el precedente francés, mediante la sentencia N° 12790-2010 y N° 10627, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, se reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental.

---

<sup>8</sup> Tomado de: <https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional>

De acuerdo a Miranda (2016)<sup>9</sup>, la citada sala determinó que “el retardo verificado en la apertura del mercado de las telecomunicaciones quebrantó no sólo el derecho de justicia pronta y cumplida, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, sino que, además, ha incidido en el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales”, como son: la libertad de elección de los consumidores, el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información, el derecho a la igualdad y la erradicación de la brecha digital, el derecho de acceder al Internet por la interface que elija el consumidor o usuario y la libertad empresarial y de comercio.

El citado autor sostiene que, en base a dicho reconocimiento, la Sala Constitucional ha acogido una serie de recursos de amparo relacionados con problemas de accesibilidad de Internet de personas que habitan zonas aisladas.

Igualmente, se tiene que señalar mediante la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642), se precisan como objetivos de la norma: Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones; Asegurar la aplicación de los principios de universalidad<sup>10</sup> y solidaridad del servicio de telecomunicaciones y fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran.

#### 2.2.5. Grecia

El numeral 2 del artículo 5A de la Constitución de Grecia (1975) dispone el derecho de toda persona de participar en la Sociedad de la Información. Luego establece, en la misma norma, la obligación del Estado de facilitar el acceso a la transmisión electrónica de información, así como a su producción, intercambio y difusión.

Por expresa remisión de la norma constitucional citada, el ejercicio del derecho, así como el cumplimiento de la obligación por parte del Estado, debe efectuarse respetando otras garantías constitucionales, como son la inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones y la protección de datos personales.

##### *“Artículo 5 A.*

*1. Todos tienen derecho a la información, tal y como se detalle por ley. Las restricciones a este derecho pueden solamente imponerse por ley y en la medida en que sean absolutamente necesarias y justificadas por razones de seguridad nacional, lucha contra el crimen o protección de derechos o intereses de terceros.*

<sup>9</sup> Miranda Bonilla, Haideer. “EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO FUNDAMENTAL”. Revista Jurídica IUS Doctrina. N° 15, 2016.

<sup>10</sup> La Ley define universalidad como: Derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto de los domicilios, con independencia de la 4 localización geográfica y condición socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.

**2. Todos tienen derecho a participar en la Sociedad de la Información. El Estado está obligado a facilitar el acceso a la información transmitida electrónicamente, así como a su producción, intercambio y difusión, siempre salvaguardando las garantías establecidas en los artículos 9, 9A y 19".** (Negrilla propia).

#### 2.2.6. Suiza

Desde el año 2006, con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 1997 (*Telecommunications Law, of April 30th, 1997*), en el artículo 11, Suiza cuenta con un servicio universal en materia de telecomunicaciones, que consiste en garantizar que el suministro de servicios básicos de telecomunicaciones esté a disposición de toda la población y en todas las regiones del país. Estos servicios deben ser accesibles, confiables y de una cierta calidad.

El servicio universal incluye telefonía, fax, transmisión de datos, conexión a los servicios de acceso a Internet de banda ancha, el acceso a los servicios de emergencia, teléfonos públicos de pago y la prestación de servicios especiales para las personas en situación de discapacidad.

A partir del 1 de enero de 2015, la velocidad mínima para la conexión a Internet de banda ancha, según lo estipulado en la licencia de servicio universal, es de 2000/200 kbit/s en comparación con la de 1000/100 kbit/s prescrita anteriormente. El precio máximo de ese servicio de banda ancha se ha reducido de 69 a 55 francos por mes (IVA no incluido).

A la fecha, el servicio universal de telecomunicaciones continuará siendo proporcionado por Swisscom, pues la Comisión Federal de Comunicaciones (ComCom) ha otorgado la licencia de servicio universal para el período de 2018 a 2022 a esta empresa.

#### 2.6.7. Chile

Actualmente en Chile se está discutiendo un proyecto de ley para establecer el Internet como Servicio Público, modificando la Ley General de Telecomunicaciones. Argumenta el Senador Juan Pablo Letelier, presidente Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, el proyecto busca la universalidad del servicio a internet, aumentar cobertura y conectividad. Porque se ha evidenciado que ante una reducción de los ingresos, las familias lo primero que piensan para reducir costos es abandonar los asociados a la conectividad (Foro: "La conectividad en la post-pandemia. Hacia una regulación inteligente").<sup>11</sup>

#### 2.6.8. Ecuador

Este país tiene contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política que Todas las

---

<sup>11</sup> Se puede ver en: <http://quecircule.com/nota/diputados-analiza-la-conectividad-en-la-post-pandemia/>

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

Como se evidencia, son varios los países que han venido avanzando progresivamente en la necesidad de darle relevancia jurídica y normativa al internet, algunos contemplándolo como un derecho de carácter constitucional y otros dejándolo a disposiciones de carácter legal, pero todos convergen en principios como el de universalidad, esencialidad, cobertura y calidad. Mismos objetivos que se pretenden con esta iniciativa.

### 2.6.9. Argentina

Recientemente mediante el DNU No. 690/2020 (decreto de necesidad y urgencia), fueron declarados como servicios públicos esenciales a la telefonía celular y fija, servicios de Internet y Televisión, y consecuentemente se suspendieron los aumentos de tarifas hasta el 31 de diciembre 2020.

## 2.3. Colombia

### 2.3.1. Necesidad de Conectividad con cifras que preocupan

Según un informe publicado en noviembre del 2019 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se estima que en el mundo hay 3.600 millones de personas aún sin conexión a internet<sup>12</sup>, los cuales en su mayoría viven en los países menos desarrollados, donde en promedio solo dos de cada diez personas están en línea. Por esa razón se considera que las tecnologías digitales deben convertirse en una de las prioridades para el desarrollo de una sociedad. Para Doreen Bogdan-Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT, la colaboración de múltiples partes interesadas será clave para hacer que la conectividad universal y significativa sea una realidad para todos, y que para ellos se requerirán esfuerzos específicos para reducir el costo de la banda ancha y políticas innovadoras para financiar el despliegue de la red a poblaciones no conectadas.

Colombia hace parte de las cifras que menciona el estudio de la UIT y la pandemia del Covid-19 dejó en evidencia las brechas digitales que existen en el país, con la inmensa mayoría de los ciudadanos confinados muchos no pudieron realizar teletrabajo o educarse en línea pues carecen de conectividad.

El panorama es crítico si se tiene en cuenta que según el más reciente boletín del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cuarto Trimestre de 2019)<sup>13</sup>, señala que tan solo 6.9 millones de hogares cuentan acceso fijo de internet, lo

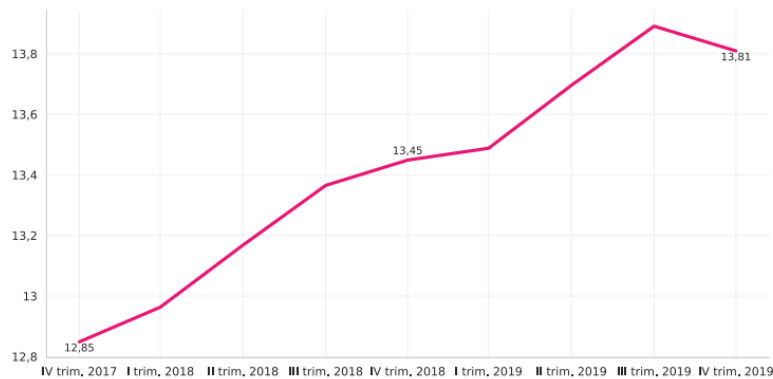
---

12. Digital gender divide. 2019. Tomado de: <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR19.aspx>New ITU data reveal growing Internet uptake but a widening divide.

13 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTic. Boletín Trimestral de las TIC.

que significa que por cada 100 habitantes tan solo 13.81 cuentan con este servicio.

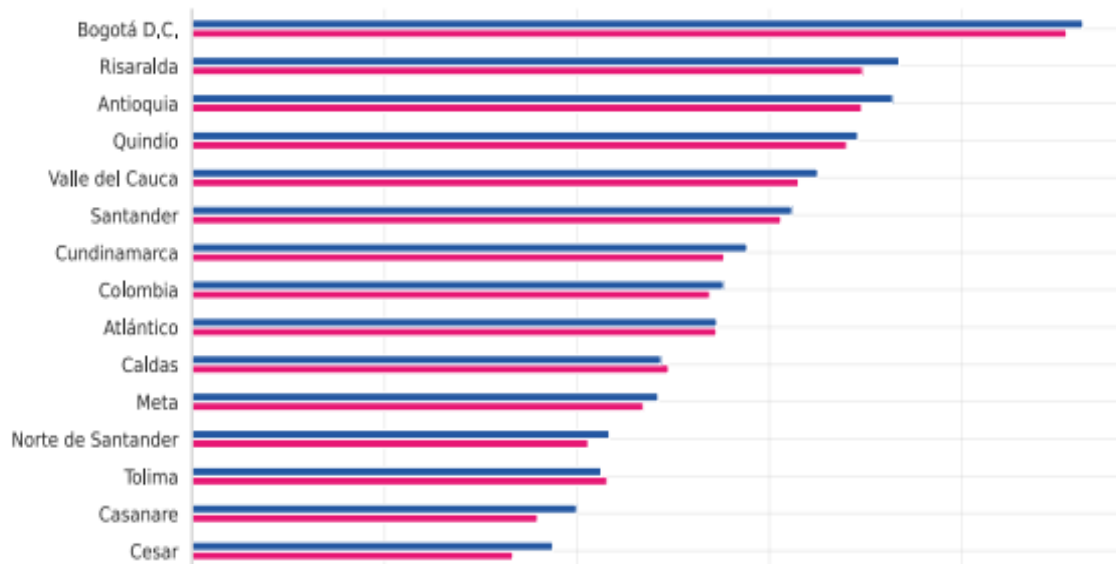
**Gráfico 2. Accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes**

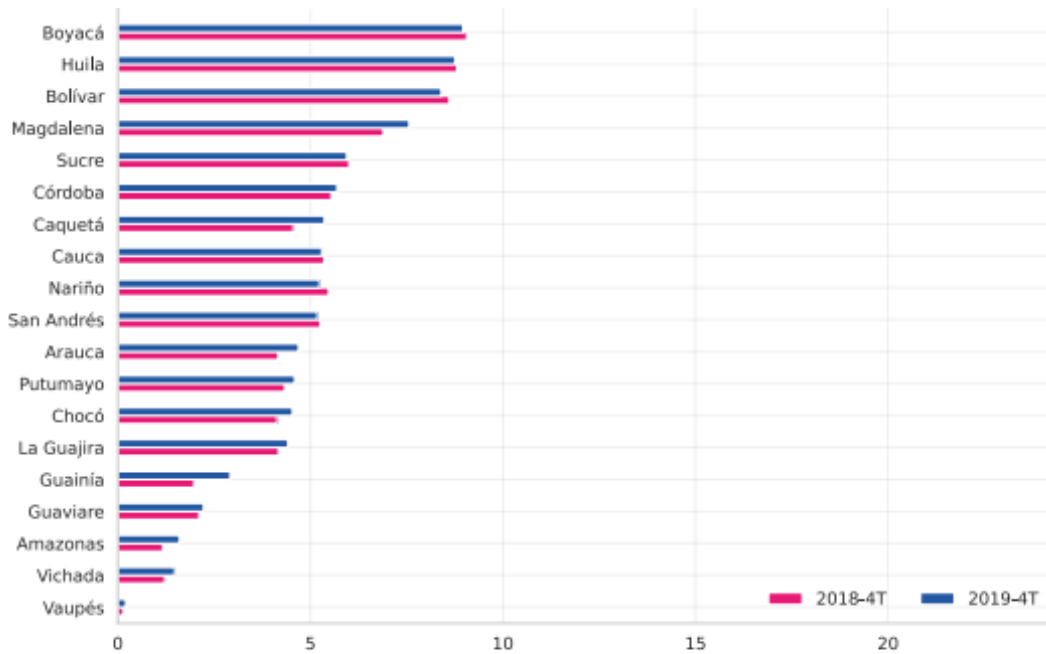


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC, y proyecciones de población del DANE con base en el Censo 2005. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2020.

El panorama regional es más desalentador, pues cerca de 24 Departamentos (más de la mitad), están por debajo del promedio nacional.

**Gráfico 16. Accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes por departamento**





Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC y proyecciones de población del Dane 2018 -2019 con base en el Censo 2005. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2020.

De otra parte, la velocidad de descarga promedio nacional del servicio de acceso fijo a Internet fue de 18,9 Mbps en el último trimestre del 2019, lo que es significativamente bajo comparado con el promedio de la velocidad media mundial de descarga que es de aproximadamente 63 Mbps para conexiones fijas.

La velocidad de descarga de Internet promedio en el estrato 6 fue de 42,4 Mbps al finalizar el cuarto trimestre de 2019, siendo este el segmento que concentró la mayor cantidad de accesos con velocidades de descarga superiores a 60 Mbps<sup>4</sup>. Por lo anterior, para el cuarto trimestre de 2019 se presentó una brecha de más de 30 Mbps con relación al estrato 1 y de 20 Mbps frente al estrato 3.

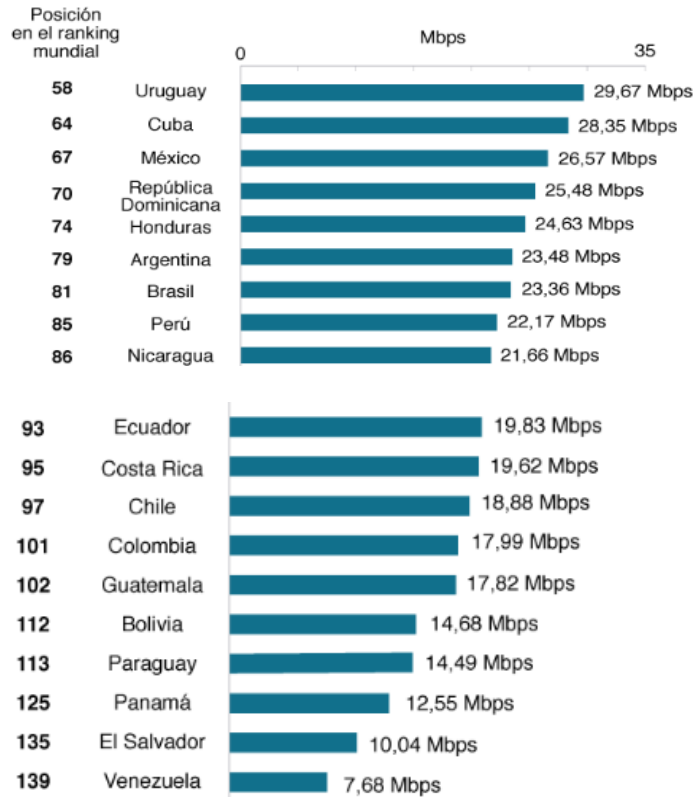
Por ejemplo, la velocidad de descarga en países como **Corea del Sur** es de 112 Mbps, **Qatar** con 75 Mbps y **Noruega** con 69 Mbps. Para no ir tan lejos, en América Latina Uruguay cuenta una velocidad de 30Mbps, Cuba con 28Mbps y México 26.5 Mbps<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Tomado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50604735#:~:text=Millones%20de%20usuarios&text=En%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o%2C%20la,63%20Mbps%20en%20conexiones%20fijas.>



## Índice global de velocidad de internet

Países de América Latina



Por su parte, según el informe del MINTIC hasta ese trimestre existían más de 30.9 millones de accesos a internet móvil, lo que significa en promedio 61 persona de cada 100 tenían esta herramienta. En lo que refiere a internet por suscripción se tiene que por cada 100 habitantes 25 cuentan con este servicio (total de 12,59 millones). Se debe decir que no obstante que estas cifras son mejores que las de internet fijo, lo cierto es que por una parte no se tiene en cuenta que muchas personas pueden contar con 2 o más servicios en estas categorías, por lo que no puede pensarse que todas las cifras son tan alentadores, y de otra parte, se debe considerar que muchas de las actividades diarias que en estos momentos se están desempeñando como el Teletrabajo o el Tele-Estudio no se pueden desarrollar óptimamente a través de equipos celulares.

Finalmente, en dicho informe se reporta que los ingresos de los operadores en algunos casos superan los 10.000 millones de pesos, tan solo por la prestación de servicios de internet móvil. Así mismo, durante el cuarto trimestre de 2019, el proveedor con mayores ingresos en pesos colombianos, sin incluir impuestos, producidos por la prestación del servicio de acceso móvil a Internet por suscripción fue Claro (\$ 767.200 millones), seguido por Movistar (\$ 308.900 millones), TIGO (\$ 162.000 millones) y Avantel (\$ 65.100 millones). Lo que demuestra que es un sector que mueve una gran

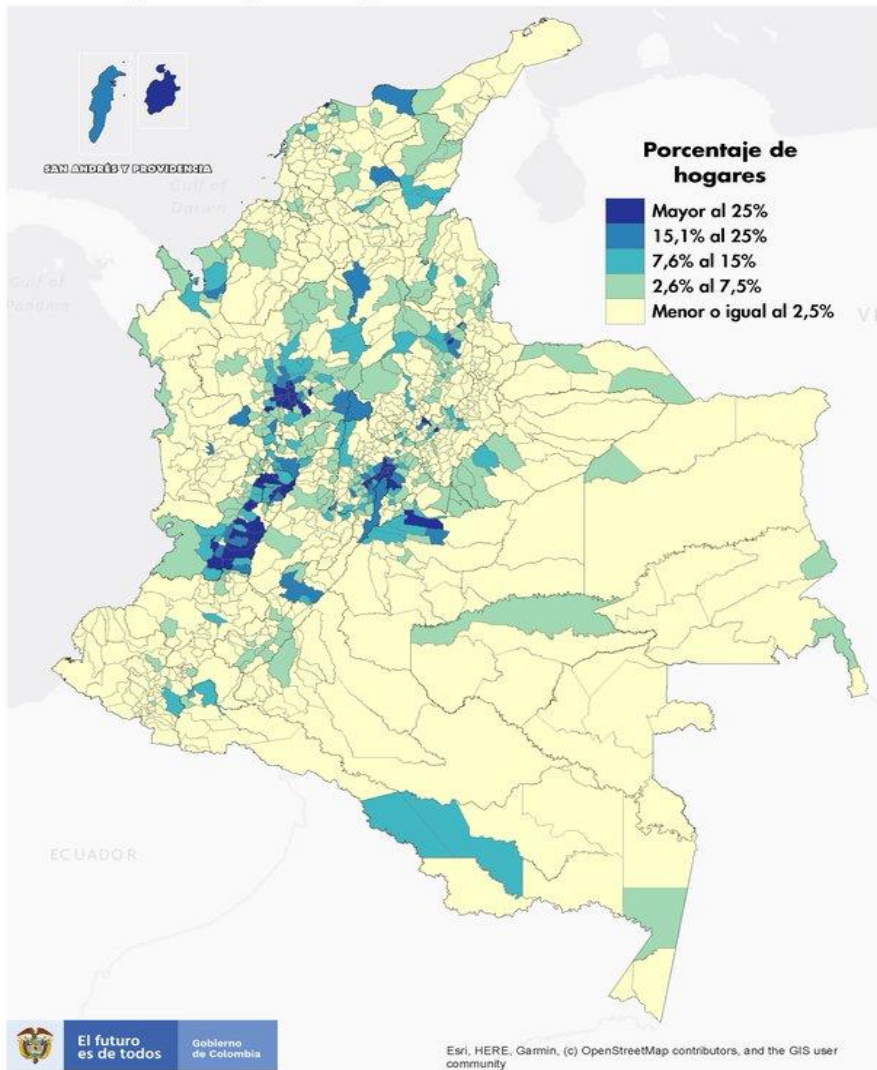
cantidad de dinero.

Más recientemente el DANE publicó algunas cifras que también dan cuenta de la necesidad de avanzar con esta iniciativa:

- En las zonas rurales de Colombia, tan solo el 6,7 % de los hogares con personas asistentes al sistema escolar, entre los 5 y 18 años, tienen acceso a internet.

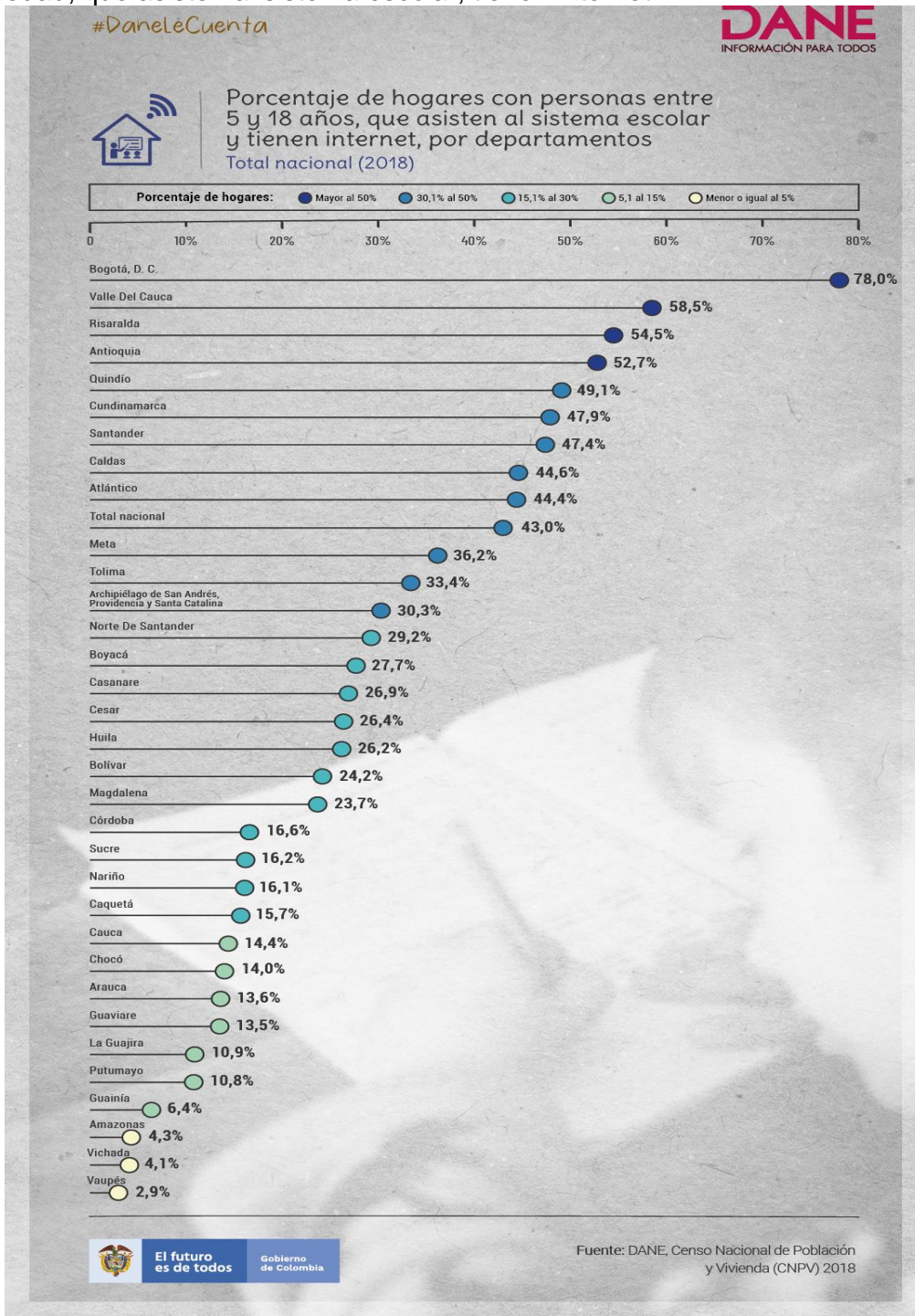
**Porcentaje de hogares con personas entre 5 y 18 años que asisten al sistema escolar y tienen internet en centros poblados y rural disperso - CNPV 2018**

**DANE**  
INFORMACIÓN PARA TODOS



Y el panorama regional sigue la tendencia, pues existe una brecha enorme entre algunos de los Departamentos, por ejemplo, mientras que en Bogotá, el 78,0% de los hogares con personas entre los 5 y 18 años, que asisten al sistema escolar, tienen internet, en el Vaupés tan solo el 2,9% de los hogares con personas en ese rango de

edad, que asisten al sistema escolar, tienen internet.

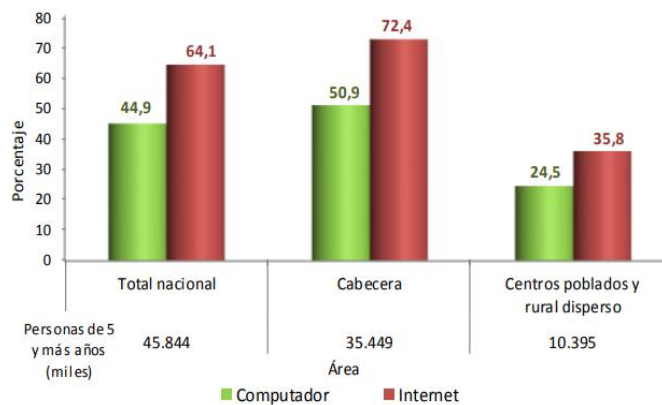


Frente al total nacional, la cifra no mejora, pues el 43,0 % (menos del 57% del total nacional) de los hogares con personas entre los 5 y 18 años, asistentes al sistema escolar, tienen internet.

Se informa por parte de esa misma entidad de estadística que a pesar de que la penetración de internet en el país supera el 40%, la brecha geográfica sigue siendo muy amplia. Afirma el director del DANE, que este 40% a nivel nacional corresponde a la alta penetración en departamentos como Bogotá (70%), Antioquia (60%) y Valle del Cauca (60%)<sup>15</sup>.

**Gráfico 1. Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron computador e Internet en cualquier lugar**

**Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso 2018**



Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV.

En 2018, el 52,7% de los hogares poseía conexión a Internet para el total nacional; 63,1% para las cabeceras y 16,2% en centros poblados y rural disperso. La conexión a Internet fijo registró mayor proporción de hogares para el total nacional (40,5%) y cabecera (50,8%), respecto a la conexión a Internet móvil.

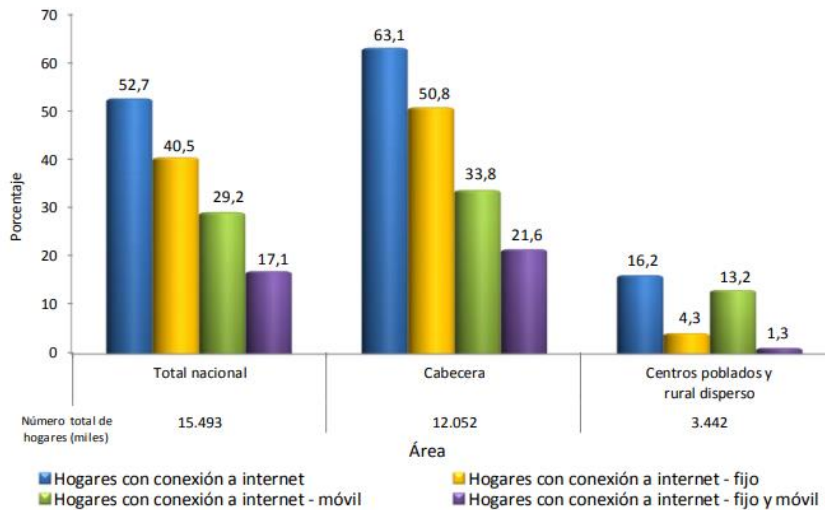
Durante el mismo período de análisis, el costo elevado fue la razón principal por la que los hogares no tenían conexión a Internet con 50,7% para el total nacional, seguido por los hogares que no lo consideran necesario (27,6%), no hay cobertura en la zona (7,7%), no saben usarlo (7,0%) y los hogares que no acceden porque no tienen un dispositivo para conectarse (3,8%).<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Ver: <https://www.canalinstitucional.tv/noticias/resultados-censo-poblacional-dane>

<sup>16</sup> Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad. Bogotá. 2018. Tomado de: [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol\\_tic\\_hogares\\_2018.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_2018.pdf)



**Gráfico 8. Proporción de hogares que poseen conexión a Internet según tipo de conexión  
Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso  
2018**



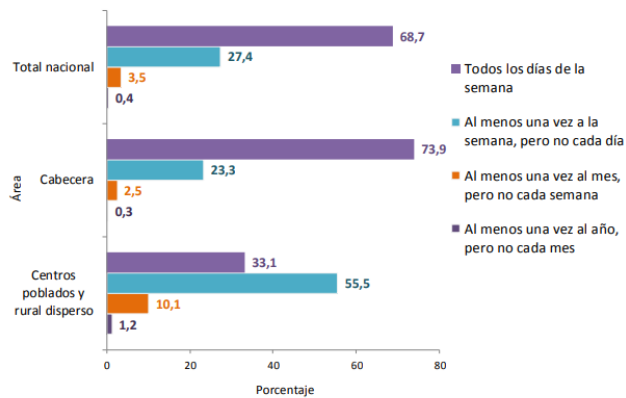
**Fuente:** DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV.

Nota 1: La base de cálculo de este indicador es el número total de hogares.

Nota 2: Por efecto del redondeo en miles, la suma del total de hogares puede diferir ligeramente.

Antes de la pandemia, el 68,7% de las personas censadas por el DANE manifestaron que usaron el internet todos los días de la semana; 27,4% lo hicieron al menos una vez a la semana, pero no cada día, y 3,5% lo hicieron al menos una vez al mes, pero no cada semana. Para cabecera, del total de personas de 5 y más años que usaron Internet, 73,9% lo hicieron todos los días de la semana; 23,3% lo usaron al menos una vez a la semana, pero no cada día, y 2,5% lo usaron al menos una vez al mes, pero no cada semana. Para centros poblados y rural disperso, del total de personas de 5 y más años que usaron Internet, 33,1% lo hicieron todos los días de la semana; 55,5% lo usaron al menos una vez a la semana, pero no cada día, y 10,1% lo usaron al menos una vez al mes, pero no cada semana.

**Gráfico 34. Distribución de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet, según frecuencia de uso**  
**Total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso**  
**2018**



**Fuente:** DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV.  
**Nota:** La suma de las distribuciones puede no dar 100% debido a la aproximación en el nivel de dígitos utilizados.

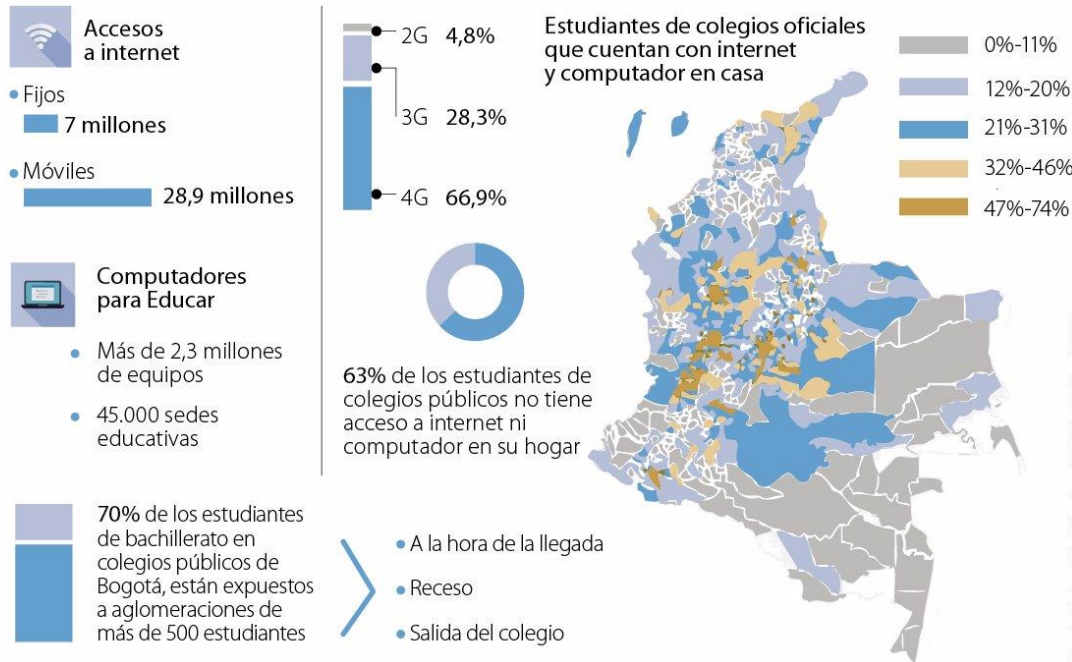
Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hasta el año 2019, había en el país cerca de 23,8 millones de personas que no contaban con acceso a internet, siendo la población de las regiones apartadas y rurales, así como los estrados 1 y 2 de las zonas urbanas del país los más afectados por esta carencia. Por esta razón, la meta del Gobierno, fijada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), era que para el año 2022, al menos el 70 % de la población (31,8 millones) tuviera acceso a banda ancha de calidad, esto es aumentar al menos un 46.5% el número de personas con internet, respecto al año anterior. Frente al panorama estudiantil, según cifras del DANE para el año 2018 en Colombia había casi 10 millones de estudiantes y 447 mil docentes. Al respecto, un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, reveló que el 96 por ciento de los municipios del país no podrían implementar lecciones virtuales debido a que menos de la mitad de los diez millones de estudiantes de colegios públicos (cerca del 37%) tienen computador e internet en su casa<sup>17</sup>. Por su parte, según el Ministerio del Trabajo, actualmente están Teletrabajando o haciendo Trabajo en Casa más de 6 millones de personas y que se espera que muchos de ellos sigan por largo tiempo en esa medida<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> «Los retos que plantea el coronavirus para la educación en Colombia», 2020. Semana. Recuperado 3 de mayo de 2020, de <https://www.semana.com/nacion/articulo/los-retos-que-plantea-el-coronavirus-para-la-educacion-en-colombia/659653>

<sup>18</sup> Tomado de: <https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2020/mayo/efectivas-han-sido-las-medidas-implementadas-por-el-gobierno-para-proteger-el-empleo-en-colombia>



**COLOMBIA FRENTE A LAS MEDIDAS DE TELETRABAJO Y TELEESTUDIO**



Por último, advertir que esta iniciativa también atiende al llamado que se hiciera por parte de la OCDE, desde donde se señaló que “es fundamental incrementar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. La concentración del mercado de las telecomunicaciones sigue siendo alta. Los tres principales operadores acaparan cerca del 73% de las conexiones de banda ancha del país. En los servicios de datos móviles, la concentración es todavía mayor, pues una sola empresa absorbe cerca del 54% de las líneas de datos prepagados.

Esta falta de competencia se traduce en precios más altos. De acuerdo con el estudio de la OCDE, un paquete de internet de alto consumo fijo en Colombia cuesta 2.5 veces lo que se paga en promedio en los demás países. Esto limita los niveles de conectividad de los colombianos. De hecho, a pesar de haber registrado un importante incremento en las conexiones durante los últimos años, Colombia sigue teniendo la penetración de banda ancha más baja de los países de la OCDE, con 52 suscripciones móviles y 13 fijas por cada 100 habitantes, en comparación con un promedio de la OCDE de 110 suscripciones móviles y 31 fijas por cada 100 habitantes.”

Ese organismo recomendó mejorar la infraestructura digital y su utilización, pues según un informe realizado se determinó en el mes de diciembre de 2018, los datos sobre suscriptores a banda ancha fija y móvil por cada 100 habitantes (13,4 y 52,1 respectivamente) eran de los más bajos de la OCDE. Agregó que el 13% de las

conexiones mediante fibra y la velocidad de descarga promedio (3,48 megabits por segundo) también son inferiores a los niveles promedio de la OCDE, aunque los precios de los servicios de banda ancha fija (pese a estar descendiendo) pueden llegar a ser 2.5 veces más elevados que los registrados en los países de la OCDE.

Culminó diciendo que Colombia se está quedando rezagada en cuanto a uso generalizado de internet, ya que en 2017 este servicio solo llegaba a un 64% de la población, un nivel alcanzado por la mayoría de países de la OCDE a mediados de la primera década de 2000 según el informe. El Gobierno debería dar más pasos para aumentar la adopción y el uso de tecnologías digitales y reducir así la brecha digital entre los ciudadanos. Por ejemplo, podría mejorar la orientación del financiamiento estatal para centros públicos de conexión a internet situados en comunidades pobres y apartadas, destinar nuevos fondos a la adquisición de computadores y tecnologías de la información en escuelas y pequeñas empresas e introducir incentivos fiscales que promuevan el uso de la banca electrónica<sup>19</sup>.

### 2.3.2. Razones Jurídicas:

La Constitución Política contiene diferentes disposiciones que resulta necesario mencionar, pues son el sustento constitucional de esta iniciativa. En ellos se establece que corresponde al estado garantizar y asegurar la prestación de los servicios públicos, entre ellos el de internet, pues hoy más que nunca resulta de vital importancia para el goce efectivo de otros derechos como lo son el trabajo, la educación y la Salud:

- El **artículo 2** define que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
- El **artículo 13** establece el principio de igualdad, para lo cual el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
- El **artículo 20** dispone que se debe garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
- El **artículo 25** consagra que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
- El **artículo 27** contempla que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
- El **artículo 44** dicta que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado

---

<sup>19</sup>Tomado de: <https://www.oecd.org/newsroom/colombia-debe-impulsar-la-transformacion-digital-y-adoptar-medidas-adicionales-para-garantizar-que-toda-la-poblacion-comparta-los-beneficios.htm>

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Para tal efecto la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

- El **artículo 49** dice que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y que se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
- Por su parte el **artículo 365** señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
- Finalmente, el **artículo 366** contempla que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, por lo que será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

A nivel legal y por vía jurisprudencial, frente a los servicios públicos esenciales expresamente se tiene los siguientes:

- Los servicios públicos domiciliarios señalados en la ley 142 de 1994, reconocidos como tal por la Corte Constitucional mediante sentencia T – 568 de 1999.
- Las actividades que realizan las ramas del poder público y del sector educativo, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia T – 1059 de 2001.
- Los servicios ofrecidos por la Policía Fiscal y de Aduanas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 53 de la Ley 633 de 2000.
- Los servicios de los funcionarios del INPEC relacionadas con la custodia y vigilancia carcelaria, de conformidad con el artículo 113 del Decreto 407 de 1994.
- Los que proveen los bomberos y el personal de prevención y atención en desastres, de acuerdo a lo consignado por el artículo 2º de la Ley 322 de 1996.
- El servicio de administración de justicia, de acuerdo a lo señalado en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996.
- Los servicios que presta la banca central, Ley 31 de 1992.
- La Seguridad social relacionada con salud y pago de pensiones (Ley 100/93).
- La Explotación del Petróleo y Educación (desarrollo Jurisprudencial) y también a la Reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan. (Ley 336 de 1996).

Existen unos servicios públicos esenciales, definidos como tal por la propia Constitución, como la educación, el saneamiento ambiental y el suministro de agua potable, tal como lo ha entendido la Corte Constitucional en la sentencia T-423 de 1996.

Por su parte, el desarrollo de los servicios públicos como esenciales ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del máximo tribunal constitucional colombiano. Es así como desde el año de 1995, a través de la sentencia C- 450 de 1995, de la Corte definió que:

*“(...) El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales (...)”.*

Adicionalmente, debe tenerse presente que esta iniciativa atiende a lo que el mismo órgano jurisdiccional ha dicho en la sentencia C-075 de 1997, en cuanto a que corresponde al Congreso de la República definir los servicios públicos esenciales.

Concretamente, frente al servicio de Internet se reconoce que mediante las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019, se avanzó en reconocer que este es un servicio público, sin embargo, a pesar de su importancia estas normas no atienden la actual necesidad de reconocer el Internet como uno de carácter esencial para el óptimo desarrollo social, profesional, académico, laboral, personal etc., por lo que resulta necesario otorgarle tal estatus para:

- Permitir el goce efectivo de Derechos tales como: La educación, acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, la educación, al trabajo, la salud, al libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, a la seguridad personal y muchos otros más.
- Garantizar una prestación ininterrumpida del servicio y la operación del mismo, así como las acciones necesarias para la adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones.
- Evitar la suspensión del servicio por causa de las dificultades económicas de la población más vulnerable.
- Permitir un mayor amparo a través de las acciones constitucionales contempladas en el ordenamiento jurídico, por cuanto, la interrupción de dicho servicio público puede ocasionar la vulneración de otros derechos fundamentales.
- Focalizar esfuerzos políticos y económicos para que se garantice el acceso de este servicio de manera universal, de calidad y con continuidad, para toda la población sobre todo para aquellos que hacen parte la población vulnerable de las zonas rurales y urbanas del país.

- A través de la conectividad garantizar un mínimo de nivel de vida digna a los habitantes del territorio nacional.
- Fijar el principio de la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios (Sentencia Corte Constitucional C-122 de 2012).
- Garantizar el cumplimiento del deber del Estado en asegurar una prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o a través de empresas públicas o privadas.
- Controlar, regular o congelar las tarifas cobradas para poblaciones vulnerables o rurales bajo circunstancias excepcionales como las que atravesamos hoy en día.

De acuerdo con todo el panorama previamente expuesto y teniendo en cuenta que la actual situación de emergencia sanitaria ha obligado a la población colombiana a tomar acciones para evitar la aglomeración y el contacto físico entre personas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, concretamente el internet, se ha convertido en la herramienta más usada y efectiva a la hora de continuar las actividades laborales, académicas, familiares, médicas, etc., a través de las no recientes pero si crecientes modalidades de Teletrabajo, Tele-estudio, Telemedicina, entre otras medidas, que no serán temporales, sino que permanecerán en el tiempo, pues lejos de llegar a un estado de normalidad, debemos ser conscientes que los efectos del COVID-19 nos han cambiado para siempre. En ese sentido, ahora más que nunca la tecnología debe estar al servicio del bienestar social de todos los connacionales y no puede ser un factor que genere más desigualdad.

Sea esta la oportunidad para tomar medidas contundentes que permitan cumplir de manera anticipada y con celeridad la meta de conectividad que se había propuesto el Gobierno Nacional, pues los ciudadanos más vulnerables no pueden seguir viviendo anacrónicamente en una sociedad que demanda el uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, con esta medida se estaría aportando enormemente a lo que podría ser una alternativa de virtualidad en el sector educativo, con el fin de hacerle frente a la muy alta probabilidad de cierre o suspensión de los programas académicos de todos los niveles de la educación.

En ese sentido, con esta propuesta se estaría dando un gran paso para que más ciudadanos accedan a la información y a las experiencias del internet, sobre todo a la población más vulnerable de nuestro país que no tiene acceso a este servicio que resulta indispensables para la satisfacción de intereses y la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio, efectividad y garantía de los derechos y libertades fundamentales que mejoren la calidad de vida de todos los colombianos. Así

mismo, en los términos del Decreto 555 de 2020, se garantizaría la operación, adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones de manera ininterrumpida, necesarios para el goce efectivo de los derechos constitucionales.

La conexión a internet es fundamental, porque aunque no esté reconocido de manera expresa en la carta política, si tiene una íntima e inescindible relación que de manera conexa permite no solo el goce efectivo, sino la garantía de derechos básicos como el acceso a la educación en situaciones como la que estamos viviendo, a la vida, la educación, al trabajo, la salud, al libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, a la seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, los cuales deben ser provistos por el Estado.

Colombia tiene una cuenta pendiente de asegurar el acceso de internet a toda la población, y resulta evidente que hoy estamos atravesando por transformaciones que ya no van a revertirse. En ese sentido resulta necesario que el Estado y la ciudadanía cuente con las todas las herramientas necesarias para materializar ese propósito. Si algo nos deja la pandemia y que no se puede dejar pasar, es que se afianzaron los comportamientos centrados en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información y el internet se ha convertido en un habilitador de derechos fundamentales como el de la información, privacidad, acceso a las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicación, educación, salud, trabajo, etc.

### 3. Modificaciones

El texto propuesto únicamente contiene una modificación de redacción y precisión del artículo 5 de este proyecto de ley, en lo que refiere al momento desde cual se contarán los 6 meses para la implementación de la ley.

Articulado Radicado	Articulado propuesto Primer Debate
Artículo 5°. El Gobierno Nacional tendrá seis (6) meses para la reglamentación e implementación de la presente ley.	Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses para implementar lo regulado en ésta.

### 4. Posibles conflictos de interés

Con base en el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, según el cual *“El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para*



la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar”.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

“Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así:

(...)

a) *Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*

b) *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

c) *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

**a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.**

b) *Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.*

c) *Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.*

*d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.*

*e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.*

*f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...). (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Representantes, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés. En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos.

## **5. Bibliografía**

- Congreso Nacional de Chile. 2020. INFORME DE LA COMISION DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones.
- Miranda Bonilla, Haideer. “EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO FUNDAMENTAL”. Revista Jurídica IUS Doctrina. N° 15, 2016.
- Conferencia “La conectividad en la post-pandemia. Hacia una regulación inteligente”, adelantada por la Comisión de Comunicaciones e informática de la Honorable Cámara de Diputados de Argentina.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Boletín Trimestral de las TIC. Cifras Cuarto Trimestre de 2019.
- DANE. Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad. Bogotá. 2018.
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. 2014. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL. UN

## DERECHO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE: ESTUDIO COMPARADO – COLOMBIA FRENTE A ESPAÑA.

- El servicio público esencial de la administración de justicia vs el derecho a la huelga de los servidores de la rama judicial en Colombia.
- Diego Esteban Valderrama. El acceso a internet como derecho fundamental: caso costarricense y su viabilidad en Colombia. Universidad Católica de Colombia.
- Gustavo Penagos. EL SERVICIO PUBLICO. LEY DE SERVICIOS DOMICILIARIOS-DOCTRINA-JURISPRUDENCIA.
- Constitución Política de Colombia.
- Ministerio de la Protección Social. MEMORANDO SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.
- Leyes 1341 de 2009, modificado por el artículo 3° de la Ley 1978 de 2019
- Decretos 464 y 555 de 2020.
- Resolución No. A/RES/70/299 aprobó la “Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet. (2011).
- Resolución del A/HRC/20/L.13 del 29 de junio del 2012. Promoción, protección y difusión de los derechos humanos en internet. Consejo de Derechos Humanos.
- Sentencias de la Corte Constitucional: Comunicados de las Sentencias C-151 de 2020 y C-209 de 2020; C- 450 de 1995; sentencia C-075 de 1997; Sentencia Corte Constitucional C-122 de 2012).

## PROPOSICIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, presentamos ponencia positiva y solicitamos a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de Ley No. 109 de 2020 Cámara, Proyecto de Ley No. 109 de 2020 Cámara, “Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”.

De los Honorables Representantes,



**RODRIGO ROJAS LARA**  
Representante a la Cámara  
Coordinador



**MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER**  
Representante a la Cámara  
Ponente

## TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE

### PROYECTO DE LEY No.109 DE 2020 CÁMARA

**“Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”**

## EL CONGRESO DE COLOMBIA

### DECRETA

**Artículo 1º.** Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicación, el internet como uno de carácter esencial y universal, con el fin de propender por garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de los más vulnerables.

**Artículo 2º.** Modifíquese el artículo 2º de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3º de la Ley 1978 de 2019, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.

Son principios orientadores de la presente ley:

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. En el cumplimiento de este principio el Estado

promoverá prioritariamente el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país.

1.1. Declaratoria de servicio público esencial. El internet será un servicio público esencial y universal. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio.

(...)

11. Universalidad: El Estado propenderá por garantizar de manera progresiva el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general, con tarifas asequibles, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica de los usuarios.

(...)

Parágrafo transitorio. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, no se podrá suspender la prestación del servicio.”

**Artículo 3°.** Disminución de la brecha digital. Corresponde al Gobierno Nacional:

1. Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable.
2. Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos.
3. Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.
4. Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a:
  - a. Las instituciones públicas de educación básica, media y superior.



b. Las poblaciones vulnerables con necesidades sociales especiales, como zonas rurales, municipios PDET, resguardos indígenas y demás priorizadas por el gobierno nacional.

**Artículo 4°.** Adiciónese un párrafo nuevo al artículo 10° de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

“Artículo 10. Habilitación General. A partir de la vigencia de la presente Ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación general a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico.

(...)

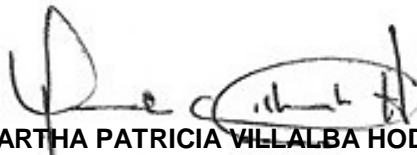
Parágrafo 4o. En materia del servicio público de internet, será considerado como un servicio público esencial y universal.”

**Artículo 5°.** A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses para implementar lo regulado en ésta.

**Artículo 6°.** Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación, y deroga todas aquellas que le sean contrarias.



RODRIGO ROJAS LARA  
Representante a la Cámara  
Coordinador



MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER  
Representante a la Cámara  
Ponente